

**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE CATALUÑA
Sala Civil y Penal**

ROLLO DE APELACIÓN JURADO núm. 43/10

Procedimiento Jurado núm. 9/10 -Audiencia Provincial de Barcelona-(Oficina del Jurado).

Causa Jurado núm. 1/09 -Juzgado de Instrucción núm.1 de Terrassa

S E N T E N C I A N Ú M . 8

Excmo. Sr. Presidente:

D. Miguel Ángel Gimeno Jubero

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. Enric Anglada Fors

D^a. Nuria Bassols Muntada

En Barcelona, a treinta y uno de marzo de dos mil once

Visto por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, integrada por los Magistrados al margen expresados, el recurso de apelación interpuesto por el **MINISTERIO FISCAL** contra la sentencia dictada en fecha 7 de octubre de 2010 por el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Barcelona, recaída en el Procedimiento núm. 9/10 del indicado Tribunal del Jurado, derivado de la Causa de Jurado núm. 1/09 del Juzgado de Instrucción nº 1 de Terrassa. El Ministerio Fiscal ha

sido representado por el fiscal D. Manuel Sancho de Salas. Ha sido parte apelada **ROBERTO FRANCISCO I. A.** quien ha sido defendido en el acto del juicio por el letrado D. Marcos García Montes y representado por el procurador D. Gonzalo de Arquer en sustitución de D. Ángel Montero Brusell.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El día 7 de octubre de 2010, en la causa antes referenciada, recayó Sentencia cuyos hechos probados son (sic):

"**Unico.-** Ha sido probado que en la noche del día 6 de noviembre de 2008, el acusado Roberto Francisco I. A. celebraba el cumpleaños de Olga L. M. y lo hacía en compañía de esta y del hermano de aquel, Daniel I. A.. La celebración consistió en una cena que se desarrolló en una de las estancias de una nave industrial abandonada sita en la calle ***** de la localidad de *****; lugar en el que ambos hermanos convivían con José Antonio C. S..

Mientras se desarrollaba dicha cena, José Antonio C. S. se encontraba en otra de las dependencias de dicha nave, estando sentado en un sofá frente al televisor y en un estado de aturdimiento y somnolencia, que mermaba de manera particularmente intensa su capacidad de percepción, comprensión y coordinación, como consecuencia de una previa e importante ingesta alcohólica y de barbitúricos.

Durante la cena se produjo una fuerte discusión entre Olga L. M. y su novio Daniel I. A.; discusión que vino motivada esencialmente por el hartazgo de Olga L. M. por la convivencia de los hermanos con José Antonio C. S.. En un momento concreto de la discusión, el acusado Roberto Francisco I. A. se dirigió a la habitación en la que así se encontraba José Antonio C. y –con la intención de asegurarse su muerte, sin ningún riesgo propio- se acercó por detrás para evitar que la víctima supiera de sus intenciones y le golpeó en la cabeza en repetidas

ocasiones con un extintor de incendios. Los golpes fracturaron a José Antonio C. la bóveda y base del cráneo, causándole una hemorragia subaracnoidea y ventricular y una dislaceración de la base del lóbulo temporal derecho; lesiones que le causaron la muerte inmediata.

Al momento de los hechos el acusado padecía un trastorno de personalidad que en situaciones de estrés puede favorecer crisis emocionales intensas y dificultar la valoración de las consecuencias de sus actos, y era además un consumidor crónico y dependiente de benzodiacepinas, ansiolíticos y otras sustancias; circunstancias que determinaron que en dicho momento tuviera gravemente mermada su capacidad de comprender lo ilegal de su conducta y refrenar su impulsividad al cometerla."

La sentencia contiene la siguiente parte dispositiva:

" Que de conformidad con el veredicto de culpabilidad emitido por el Jurado y los hechos concurrentes que declararon probados, debo condenar y condeno a Roberto Francisco I. A. como autor de un delito de asesinato del artículo 139 del CP, concurriendo la eximente incompleta del artículo 21.1 en relación con el artículo 20.1 del mismo texto legal, a la pena de prisión por tiempo de ocho años e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Todo ello condenándole como le condeno al pago de las costas procesales causadas y a que indemnice a María de los Angeles C. A. y Alejandro C. A. en la cantidad de 30.000 euros para cada uno de ellos."

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución, el **MINISTERIO FISCAL** interpuso en tiempo y forma el presente recurso de apelación, que se ha sustanciado en este Tribunal de acuerdo con los preceptos legales, habiéndose señalado para la vista de la alzada el día **28 de marzo de 2011** a las **10:30 horas** de su mañana, fecha en la que ha tenido lugar con el resultado que es de ver en la diligencia extendida al efecto unida a las presentes actuaciones.

Ha actuado como Ponente el Magistrado de esta Sala Ilmo. Sr. D. Enric Anglada i Fors.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Frente a la sentencia dictada por el Magistrado-Presidente, el día 7 de octubre de 2010, en el procedimiento de jurado núm. 9/10, procedente del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Terrassa, se alza el Ministerio Fiscal, a través del presente recurso de apelación, alegando como motivo único del mismo: ***Infracción de precepto legal en la calificación de los hechos, conforme a lo previsto en el artículo 846 bis c), apartado b) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, derivada de la indebida aplicación de los artículos 21.1 y 20.1 del Código Penal,*** interesando que se deje sin efecto la susodicha sentencia y que en su lugar se dicte otra, "en la que se condene a Roberto Francisco I. A., como responsable de un delito de asesinato previsto en el artículo 139,1. del Código Penal, *sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 19 años de prisión...;* subsidiariamente, como responsable del mismo delito, *con la concurrencia de la circunstancia atenuante analógica del artículo 21.6 en relación con el artículo 21.1 y 20.1 del mismo cuerpo legal a la pena de 17 años de prisión...*".

La dirección letrada del apelado se opone al recurso del Ministerio Público, aduciendo, de una parte, que aunque éste invoque un solo motivo de apelación, dentro del mismo está configurando en la práctica varios submotivos y, además, bajo el amparo de una supuesta infracción legal, lo

que en realidad pretende es que se valore nuevamente la prueba practicada, cuando no ha introducido siquiera, como motivo del recurso, la errónea valoración de la misma, y, de otra, que la finalidad última del Fiscal, según resulta de su escrito impugnatorio, es la de modificar el objeto del veredicto, cuando no sólo se aquietó a éste en su momento procesal, sino que tampoco ahora ha sido objeto de este recurso, por lo que teniendo la apelación, en el procedimiento de Jurado como el que nos ocupa, un carácter realmente extraordinario, concluye la defensa del condenado indicando que resulta difícil en el supuesto de autos determinar cuál es el concreto gravamen a los efectos de la interposición del presente recurso de apelación por parte del Ministerio Público.

SEGUNDO.- 1. Planteada así la cuestión controvertida en esta alzada, es de señalar, ante todo, que para poder verificar y establecer si la sentencia apelada ha incurrido en infracción de precepto legal en la calificación de los hechos, como sostiene el Ministerio Fiscal, al haber acogido el Magistrado-Presidente la eximente incompleta del artículo 21.1 en relación con el artículo 20.1 del Código Penal, deberá acudirse precisamente a las cuestiones que en tal particular han sido objeto del veredicto por parte del Tribunal de Jurado, respecto del que, como se ha apuntado en la precedente fundamentación jurídica, hubo aquiescencia total y absoluta por parte del Fiscal.

2. Dicho esto, veamos los concretos hechos en que se dilucidan y se justifican las circunstancias de salud mental afectantes al hoy apelado. Así en el Hecho 15., los miembros del Jurado declaran probado, que: *"El acusado padecía al momento de los hechos un deterioro de la voluntad o del*

pensamiento que afectaba a su percepción en el mundo exterior" y ello en base a la siguiente motivación: "porque remitiéndonos al testimonio e informe realizado por el Dr. Samanes, el acusado sufría un trastorno de personalidad que supone mayor vulnerabilidad en situaciones de estrés, pudo favorecer una crisis emocional intensa y no valorar las consecuencias de sus actos". Seguidamente en el hecho 16., declaran probado, que: "El acusado era al momento de los hechos un consumidor crónico de benzodiazepinas, ansiolíticos y otras sustancias, habiendo desarrollado una dependencia a su ingesta", indicando como elementos de convicción: "el informe toxicológico realizado al acusado en el que se detecta presencia de benzodiazepinas y el testimonio de la Dra. Eva Díaz López que tiempo antes estuvo recetándole dicho medicamento y se las entregaba tiempo después a su hermano, y el testimonio del acusado que dice que su hermano seguía suministrándoselas al momento de los hechos", aunque el Ministerio Fiscal quiera quitar transcendencia a tal hecho, porque los componentes del Tribunal declararon no probado que el acusado se encontrara en una crisis por abstinencia de consumo de tales fármacos. Pero y ello no puede ignorarse, ni obviarse, es que, tras declarar no probado en la proposición 19., precisamente como consecuencia de lo que se acaba de exponer, que "el acusado estuviera completamente privado de la capacidad de conocer la ilegalidad de su conducta o de refrenar su impulso a cometerla" (eximente completa de la responsabilidad penal), en el hecho 20., los miembros del Tribunal de Jurado declararon probado que: "Estas circunstancias (las declaradas probadas en las preguntas 15 y 16 -atinentes a su salud mental-) determinaron que el acusado tuviera **gravemente mermada su capacidad de comprender lo ilegal de su conducta o gravemente mermada su capacidad de refrenar su impulsividad al cometerla**", refiriendo como elementos de convicción, "los informes psiquiátricos del Dr. Mariano Royo, del Dr. Enrique Fernández, Dra. Blanca Navarro Pacheco y Alicia Navarro, considerando que el acusado tenía gravemente mermada su capacidad debido al trastorno que le diagnosticaron". Por ello, al declararse probado el

hecho 20., no fue necesario entrar a votar el hecho 21., que era del tenor literal siguiente: *"Estas circunstancias -las relativas a la salud mental de Roberto Francisco I. A.- determinaron que el acusado tuviera levemente mermada su capacidad de comprender lo ilegal de su conducta o..."*.

3. Una vez expuesto lo anterior, es de reseñar que el propio Ministerio Fiscal, ahora apelante, tanto en su escrito de recurso, como en su informe en el acto de la vista, tras manifestar que el objeto del veredicto se confeccionó de forma correcta y por ello no lo impugnó, indica que la motivación efectuada por el Jurado al declarar probados los hechos 15. y 20., pese a ser escueta, estima que es acertada y suficiente, aunque luego, haciendo un circunloquio e intentando envolverlo y disfrazarlo como una infracción de ley por parte de la sentencia, considera que *"la conclusión a la que llega el Tribunal del Jurado cuando da por probado el Hecho Vigésimo supone la práctica de un previo juicio de inferencia que no resulta ajustado a las reglas del criterio humano ni a los requisitos establecidos por la jurisprudencia"*, o sea que, en realidad, lo que pretende es a través de la denuncia de una supuesta infracción legal, combatir la valoración de la prueba practicada en el juicio oral y singularmente el resultado de la pericial llevada a cabo conjuntamente, a efectos de velar y respetar el principio de contradicción, por los seis peritos propuestos. Pero es más, y ello tampoco puede obviarse, ni desconocerse, el Ministerio Público, a la vista del veredicto de culpabilidad emitido por el Jurado, en el trámite del artículo 68 de la LOTJ, solicitó para el acusado por el delito de asesinato la pena de catorce años y once meses de prisión, esto es, llegó a rebajar un grado la pena correspondiente a dicho ilícito penal, entendiendo, por tanto, que concurría la eximente incompleta prevista en el artículo 21.1 y 20.1 del Código Penal, que es precisamente lo que acogió el Magistrado-

Presidente en la sentencia, impugnándola ahora precisamente el Fiscal, cual antes se ha indicado, sobre la base de una supuesta infracción legal, cuando él, en dicho trámite, atendida la tesis que ahora mantiene en su recurso y pese a que el Jurado declaró probado, en el hecho 20., que en el momento de los hechos *el acusado tenía gravemente mermada su capacidad*, podía perfectamente considerar y pedir una pena superior, coincidente a la ahora solicitada, con carácter subsidiario -17 años-, sustentando que tal circunstancia podía incardinarse dentro de la atenuante analógica del artículo 21.6 en relación con el artículo 21.1 y 20.1 del Código Penal, y no sólo en estos dos últimos, como apuntó en el trámite antes referido. Como complemento a lo que se acaba de mencionar, es de constatar que en los comentarios realizados a la Exposición de Motivos y al mentado artículo 68 de la vigente Ley de Jurado, L.O. 5/1995, de 22 de mayo, se indica que, *hay que tener en cuenta que la nueva Ley vincula mucho más al Magistrado-Presidente que lo que lo hacía la Ley de 1888, ya que, a diferencia de aquélla, en que pese a que el Jurado emitiese un juicio de culpabilidad, luego se podía absolver al imputado al apreciarse por el Tribunal de Derecho una causa de exención de responsabilidad alegada durante esta fase por el Ministerio Fiscal o los defensores, en la nueva Ley la declaración de hechos que hace el Jurado sobre posibles causas de exención, grado de ejecución, participación y circunstancias modificativas de la responsabilidad condicionan definitivamente la sentencia.*

4. Así las cosas, y entrando de forma somera al examen de “los submotivos” del recurso del Fiscal, es de destacar, ante todo, frente a los argumentos revocatorios invocados a tal fin, la reciente sentencia del TSJC 6/2011 de 17 de marzo, en la que se declaró textualmente que “*el análisis realizado por el Jurado no puede implicar una nueva valoración de*

la prueba, sino un control de la interpretación de los resultados probatorios, lo que a la postre se resuelve: a) en la apreciación de la existencia o no de una verdadera actividad probatoria, con observancia de las normas constitucionales y legales que regulan la admisibilidad y licitud de cada uno de los medios de prueba y su práctica; y b) en la revisión de la estructura racional del juicio sobre la prueba, es decir, en lo que respecta a la observación por parte del Tribunal de las reglas de la lógica, de los principios de la experiencia y de los conocimientos científicos...". En definitiva, ha de concluirse que el juicio lógico sobre la suficiencia de la prueba que concurre... es plenamente adecuado y conforma un juicio recto y ecuánime, dado que en el caso que ahora nos ocupa en absoluto se ha procedido a una valoración arbitraria ni infundada de aquélla, lo que determina que no sea posible enmendar el criterio del Jurado, puesto que en lo concerniente a la valoración de la prueba, dado el carácter semi extraordinario del presente recurso, como ya se ha apuntado, no permite una nueva apreciación de la misma, que forzosamente habría de referirse a la documentada por el Tribunal "a quo" con merma del principio de inmediación, sino sólo el control de la interpretación de los resultados probatorios, lo que a la postre se resuelve en el examen de la licitud de la prueba, en el de su utilidad y, en fin, en la revisión de la estructura racional del juicio de valoración de la prueba. Por ello, deviniendo irrevisable en esta alzada la credibilidad del contenido emergente de las pruebas practicadas ante el Tribunal de Jurado, puesto que su apreciación es de la competencia exclusiva del mismo, en virtud del trascendental principio de inmediación, sin que pueda revisarse en apelación, "salvo casos excepcionales en los que se aporten datos o elementos de hecho no tenidos en cuenta por aquél Tribunal que puedan poner de relieve una valoración arbitraria" (SS. TSJC, de 4 octubre de 2001, 28 de febrero, 30 de mayo y 22 de diciembre de 2005, 13 de noviembre de 2006, 7 de abril,

*16 de junio y 7 de julio de 2008, 12 de marzo y 28 de abril de 2009, 25 de enero y 6 de septiembre de 2010 y 14 de marzo de 2011, y SS. TS. Sala 2ª, 1564/2002 de 7 de octubre, 1647/2002 de 14 de octubre, 288/2003 de 28 de febrero y 894/2005 de 7 de julio)”, lo que no ha acontecido en el presente caso, por lo que debe concluirse en la inalterabilidad del *factum* declarado probado.*

5. En el supuesto de autos, como antes se ha indicado, el Jurado dio por probado que el acusado era un consumidor crónico y dependiente a las benzodiacepinas -pese a no hallarse bajo síndrome de abstinencia-, al igual que padecía en el momento de los hechos un trastorno de personalidad que en situaciones de estrés puede favorecer crisis emocionales intensas y dificultar la valoración de las consecuencias de sus actos, entendiendo por ello el Magistrado-Presidente que concurría en el imputado la eximente incompleta del artículo 21.1 en relación con el artículo 20.1 del código Penal, añadiendo en la resolución impugnada, en estricta observancia de lo estatuido en el artículo 70.2 LOTJ, como complemento de la conclusión alcanzada por el Jurado (SS. TS, Sala 2ª, 132/2004 de 4 de febrero, 1116/2004 de 14 de octubre y 894/2005 de 7 de julio), de que tales circunstancias, *en conjunción con la mecánica de los hechos que se ha declarado probados*, determina que el Jurado entienda acreditado (Hecho 20) que al momento de los hechos *el acusado tuviera gravemente mermada su capacidad de comprender lo ilegal de su conducta, con merma de su capacidad de refrenar su impulsividad*; conclusión que toma su asiento en los informes psiquiátricos coincidentes de los Dres. D. Mariano Royo, D. Enrique Fernández, Dña. Blanca Navarro Pacheco y Dña. Alicia Romero y que no sólo lleva al Jurado a excluir la eximente completa interesada por la defensa (Hecho 19), sino que

"determina la apreciación de la eximente incompleta referida a la vista de la consideración jurisprudencial de que para la valoración de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal basadas en el estado mental del acusado, ha de estarse a la relación entre el trastorno mental y el acto delictivo en el modo y situación en el que se produjo...; todo ello puesto en relación con la consideración jurisprudencial de que las psicopatías pueden tener la consideración de eximente incompleta... cuando son especialmente graves o concurren asociadas a otras circunstancias o patologías", como acontece en el caso enjuiciado, pues aunque, ciertamente, un trastorno de personalidad por sí solo, en numerosas ocasiones la doctrina jurisprudencial lo ha considerado irrelevante en cuanto a la imputabilidad, por estimar que si bien es susceptible de tratamiento e incluso pueden constituir el primer signo de otras alteraciones más graves (enfermedad neurológica), ello no quiere decir que la capacidad de entender y querer del sujeto esté necesariamente disminuida o alterada desde el punto de vista de la responsabilidad penal (SS. TS, Sala 2ª, de 21 de junio y 3 de diciembre de 2002, 7 de abril de 2003 y 7 de febrero de 2006), y en otras muchas ha entendido que debe apreciarse una ligera minoración de sus facultades volitivas en forma de atenuante analógica (SS. TS, Sala 2ª, de 19 de diciembre de 1986, 6 de marzo de 1989, 5 de noviembre de 1997 y 4 de julio de 2005), si bien en otros casos, cuando los trastornos de la personalidad aparecen unidos a otra patología (drogadicción, alcoholismo, etc...), puede apreciarse la eximente incompleta (SS. TS, Sala 2ª, entre otras muchas sobre el particular, de 6 de noviembre de 1992, 4 de octubre de 1994, 19 de diciembre de 1995, 20 de febrero de 1998, 22 de octubre de 2003 y 13 de noviembre de 2007). Pues bien, en el supuesto de autos, además de darse por probado que el acusado padecía un trastorno de personalidad que pudo favorecer una crisis emocional intensa en el momento de los hechos, también se consideró absolutamente

probado que junto a esta alteración psíquica el acusado padecía otra importante patología que le podía acarrear a la descompensación, era *consumidor crónico de benzodiacepinas, con dependencia a tales sustancias*, y de ahí que en base a la asociación de ambas circunstancias, los componentes del Jurado declararan probado que tenía gravemente mermada su capacidad de comprender y querer.

6. Corolario de lo razonado y dado que las conclusiones del Tribunal de Jurado tienen en tal particular una motivación razonable, no resultan infundadas, ni son fruto de un error patente, ya que reflejan con claridad cuál fue el proceso de convicción alcanzado, el cual ha sido además completado, como antes se ha indicado, por el Magistrado-Presidente en los razonamientos de la sentencia impugnada, la cual, a diferencia de lo sustentado por el Ministerio Fiscal en su recurso -en el que, en realidad, pretende una nueva y distinta valoración de la prueba pericial practicada-, no ha incurrido en infracción legal alguna, es la íntegra ratificación acerca de la concurrencia en el caso que nos ocupa de la circunstancia de exención incompleta de la responsabilidad criminal recurrida por el Ministerio Público.

TERCERO.- Consecuentemente con todo lo hasta aquí explicitado, procede la desestimación del recurso de apelación formulado y la íntegra confirmación de la sentencia impugnada.

CUARTO.- Pese a la plena y total confirmación de la resolución apelada, como quiera que la Ley de Enjuiciamiento Criminal no dispone

que las costas procesales deban imponerse necesariamente al recurrente que vea desestimado en todo o en parte su recurso de apelación, a diferencia de lo que sucede con el de casación (Art. 901 de la LECr.), cuyo precepto “in fine” exceptúa, además, de tal condena al Ministerio Fiscal, es por lo que procede declarar de oficio las costas causadas en esta alzada.

VISTOS, los preceptos legales citados y demás de aplicación.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA DE LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA, D I J O :

Se acuerda DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por el MINISTERIO FISCAL, contra la sentencia dictada el día 7 de octubre de 2010, en el Procedimiento de Jurado núm. 9/10, dimanante de la Causa de Jurado núm. 1/09 del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Terrassa, y, en consecuencia, **CONFIRMAR** íntegramente dicha sentencia, declarando de oficio las costas causadas en esta alzada.

Notifíquese la presente resolución al acusado a las partes personadas y al acusado, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo en los términos que previene el art. 847 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Así por esta, nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN. La anterior Sentencia fue leída firmada y publicada en el mismo día de su fecha. Doy fe.